



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Victor Osvaldo Mejía Castrillón.
DEMANDADO	Concretos y Asfaltos SA. En reorganización – Conasfaltos –
RADICADO	05 088 31 05 002 2021 00039 01
TEMA	Acreencias laborales - Apelación
DECISIÓN	Confirma sentencia

Medellín, cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anunciada, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín procede a desatar el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de Conasfaltos. La Sala, previa deliberación, adopta el proyecto presentado por el magistrado ponente, que se traduce en la siguiente sentencia.

Pretensiones

El demandante solicitó que se declarara que la relación laboral existente con Conalfaltos terminó el 22 de marzo de 2020 por decisión unilateral y sin justa causa del empleador; que se le adeudaba la liquidación final de prestaciones sociales desde el 22 de marzo de 2020, correspondiente a salario de marzo de 2020, cesantías del 2019, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones y auxilio de transporte del año 2020.

En consecuencia, solicitó se condenara a la accionada a reconocerle y pagarle conceptos tales como el salario de marzo de 2020, cesantías del 2019, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones y auxilio de transporte del año 2020. Además, que se ordenara la cancelación de las sanciones por mora

previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990, y 65 del CST, por no pago oportuno de la liquidación de las prestaciones sociales.

Hechos

Relató que fue contratado por Conasfaltos, mediante contrato a término indefinido el 23 de enero de 2006; que se desempeñó como oficial de obra, y que para el año 2020 devengó un salario básico de \$1.481.018, y uno promedio del orden de \$1.734.636, a lo que se suma el subsidio de transporte que percibía, equivalente a \$102.853, y la prima de vacaciones.

Anotó que el 22 de marzo de 2020 Conasfaltos le informó que daba por finalizado el contrato de trabajo de manera unilateral, y que la liquidación de prestaciones sociales y la indemnización por despido se le pagaría a la cuenta de nómina.

Agregó que presentó solicitud el 4 de noviembre de 2020 para que le fueran pagados los conceptos antes referidos, y allí se enteró del proceso de reorganización de la demandada.

Contestación

El apoderado judicial de Concretos y Asfaltos S.A. en reorganización – Conasfaltos – sostuvo son ciertos los hechos relativos al contrato de trabajo a término indefinido desde el 23 de enero de 2016; que se desempeñó como oficial de obra; la remuneración para la fecha de finalización del contrato era de \$1.734.636 y subsidio de transporte de \$102.853; que recibía prima de vacaciones; la fecha de terminación del contrato de trabajo de demandante 20 de marzo de 2020; y la reorganización de la empresa.

A su vez se opuso a la totalidad de las pretensiones, y propuso las excepciones de fondo que denominó inexistencia de la obligación, pago, «Conasfaltos SA se encuentra en trámite de reorganización empresarial de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1116 de 2006», prescripción, compensación, falta de competencia y buena fe.

Sentencia de primera instancia

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello, el 5 de julio de 2022, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: SE CONDENA a CONASFALTOS S.A. EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL a reconocer y pagar al señor VÍCTOR OSVALDO MEJÍA CASTRILLÓN, las sumas que a continuación se relacionan y por los conceptos que se explican:

- Cesantías de 2020	\$ 395.112
- Cesantías de 2019	\$ 1.654.941
- Intereses a las Cesantías	\$ 10.799
- Prima de Servicios	\$ 395.110
- Vacaciones	\$ 168.453
- Prima de Vacaciones	\$ 617.901
- Aux. De Transporte	\$ 10.885
- Indemnización por Despido Sin Justa Causa.	\$ 16.960.683

SEGUNDO: SE ABSUELVE a CONASLFATOS S.A. EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL de las demás pretensiones instauradas en su contra.

TERCERO: SE CONDENA en costas procesales a CONASFALTOS S. A. y a favor del demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.330.000.

Para adoptar tal decisión, consideró que, no estaba en discusión la existencia de una relación laboral que unió a las partes, que, a la finalización de dicho vínculo la demandada quedó adeudando salarios, prestaciones sociales, vacaciones, y la indemnización por despido sin justa causa, por lo que es claro que es obligación del empleador cumplir con los pagos a sus trabajadores.

Apelación

La *parte demandada* presentó recurso de alzada en el que manifestó que se le debe dar el alcance correspondiente a la Ley 1116 de 2006, en cuanto a la relevancia que tiene como mecanismo exceptivo y que asigna al juez concursal la competencia, no solo de definir la prelación de los créditos que se afectarían con ocasión de la presente sentencia, sino también de las cuantías consagradas en la Ley.

Lo anterior, por cuanto fueron modificadas las cuantías que fueron tenidas en cuenta en la liquidación, y en el acuerdo concursal que fue aprobado por la Superintendencia de Sociedades, y que da fe de la verificación de la correcta liquidación de las prestaciones sociales e

indemnizaciones en favor del demandante, por lo que, desde la presentación de la contestación de la demanda, se propuso como excepción la falta de competencia del juez laboral, pues esto implica desplazar al juez concursal, pues este último es el que regula a la empresa en virtud de la aprobación que se dio al plan de pagos donde fue incluido el demandante que se dispusieron las cuantías y los momentos en que se realizaría el pago.

A continuación, reiteró que el fallo de instancia afecta la competencia del juez concursal, modifica el acuerdo de pagos, e implica un desconocimiento de la Ley, y además llevaría al incumplimiento de la empresa del acuerdo de pagos al que está obligada en virtud de la aprobación realizada por la Superintendencia de Sociedades.

Por lo señalado, solicitó modificar el fallo del Juez de primera instancia, para en su lugar absolver de las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta, además, que el cálculo de la indemnización realizado modifica el acuerdo realizado dentro del proceso concursal, pues este fue liquidado sin tener en cuenta el verdadero promedio de lo devengado por el demandante, que arroja una suma inferior a la tenida en cuenta por la Juez de instancia, esto es, que el promedio de salario para realizar la liquidación sería \$1.604.236, para cual la liquidación por indemnización sería \$15.686.352. Por lo anterior, se debe tener en cuenta la prelación de créditos señalada en la Ley 1126 de 2006.

Finalmente, pidió fuera revocada la condena en costas.

Alegatos

En sus alegatos de conclusión, la parte demandante señaló que, se debe confirmar la decisión de primera instancia, pues en el presente proceso se tiene acreditado que Conasfaltos adeuda al demandante derechos laborales reconocidos.

Puntualizó que los argumentos esbozados por la parte demandada resultan insuficientes, por cuanto la empresa vulneró derechos al demandante, debido a que a la terminación del contrato laboral, le quedó adeudando salarios y prestaciones sociales, así como la

indemnización por despido sin justa causa, lo que generó una situación económica compleja, que se mantuvo con la presentación del recurso de apelación.

CONSIDERACIONES

Se revisará la sentencia de primer grado en los específicos aspectos planteados en las apelaciones presentadas por la parte demandada. Así, los problemas jurídicos que debe resolver la sala son: (i) la excepción de falta de competencia, por existir un proceso de reorganización en la Superintendencia de Sociedades; (ii) si existe diferencia en la liquidación de la indemnización por despido sin justa causa; y (iii) si hay lugar a la condena en costas.

i) Excepción de falta de competencia, por existir un proceso de reorganización en la Superintendencia de Sociedades.

De conformidad con lo estipulado artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, en el cual se indica:

«A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos de calificación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea el caso, quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada.

El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las actuaciones surtidas en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no tendrá recurso alguno.

El promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar individual o conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, para lo cual bastará aportar copia del certificado de la Cámara de Comercio, en el que conste la inscripción del aviso de inicio del proceso, o de la providencia de apertura. El Juez o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos anteriores incurrirá en causal de mala conducta.»

La inconformidad de la parte demandada radica en que, no se puede realizar el trámite del proceso ordinario laboral, si la empresa se

encuentra en un proceso de reorganización y es por ello que debe prosperar la excepción de falta de competencia, por cuanto es el juez concursal el que debe determinar si efectivamente se le adeuda o no lo señalado por el juzgado de primera instancia.

Para la Sala, se encuentra probado que mediante auto emitido por la Superintendencia de Sociedades el día 24 de marzo de 2020 (archivo 7, página 40-47) se admitió el proceso de reorganización empresarial de la sociedad Concreto y Asfaltos SA (Conasfaltos), luego de solicitudes de admisión presentadas el 30 de septiembre y 14 de noviembre de 2019, frente a las cuales se hizo un requerimiento por el ente gubernamental para completar la información el 17 de diciembre de 2019; exigencias que fueron satisfechas el 22 y 23 enero de 2020.

Revisada la norma que se pronuncia respecto de los procesos judiciales, e instala la competencia en el juez del concurso, es fundamental dejar en claro que solo aplica cuando se trata de un proceso ejecutivo o respecto de cualquier cobro realizado al deudor.

Para el presente caso se demuestra que, solo se realiza una declaración y condena frente a unos pagos de unas prestaciones de sociales y la indemnización por despido injusto, y este es un trámite de un proceso ordinario, por lo cual no le asiste razón a la parte demandada en este punto. Tan es del caso, que la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL 5040-2019, realizó el estudio de un proceso ordinario laboral en sede de casación, encontrándose la sociedad demandada en proceso de reorganización empresarial. Inclusive, también se han presentado asuntos respecto de los cuales a sociedades en procesos de reorganización empresarial se les ha condenado, dentro de un proceso ordinario laboral, al pago de una indemnización moratoria, como puede verse en la decisión CSJ SL2248-2023; o ha habido casos en los cuales, siendo la demandada una empresa en reorganización empresarial, el Alto Tribunal ha establecido la competencia de un juez laboral para conocer del asunto, tal como se evidencia en proveído CSJ AL2797-2023.

Por lo anterior dicho, no es atendible el recurso de apelación formulado por la parte demandada y se CONFIRMARÁ la sentencia en este punto.

(ii) Indemnización por despido sin justa causa.

En cuanto a esta indemnización, se encuentra consagrada en el artículo 64 del CST, en la cual indica que, si se finaliza el contrato al trabajador y en este no medía una justa causa, se hace acreedor a la indemnización, la cual es si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.

Para el caso concreto, tenemos que el demandante laboró para Conasfaltos por el término de 14 años y 60 días, teniendo en cuenta el salario promedio aceptado por las partes fue de \$ 1.734.636, y una vez realizado el cálculo aritmético, con la fórmula que trae el artículo 64 del CST, se llega a la conclusión que la liquidación emitida por el juzgado de primera instancia se encuentra ajustada, por lo cual también se CONFIRMARÁ en este punto la decisión.

(iii) Costas procesales

Su imposición se contrae al resultado del proceso; por ello, la parte vencida en juicio debe asumir el importe dispuesto, conforme lo prevé el artículo 365 del Código General del Proceso, independientemente de la existencia de un actuar de buena o mala fe.

Como se puede observar en el desarrollo del presente proceso, la parte demandada, Conasfaltos, resultó vencida en primera instancia y, aun así, teniendo la certeza que se encontraba en un proceso de reorganización empresarial, continuo con el trámite no es impedimento para que sea condenado por este ítem.

Por los razonamientos desarrollados, se confirmará el fallo apelado por la parte demandante en cuanto a este aspecto.

Con los argumentos anteriores, y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del CPTSS, modificado por el

artículo 35 de la Ley 712 de 2001, la sentencia de primera instancia ha de confirmarse en su totalidad.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. Las de esta, atendiendo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, y por no salir adelante la apelación formulada por la parte demandada, son a cargo de esta y en favor de la demandante. De conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en la alzada, se fija la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior De Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

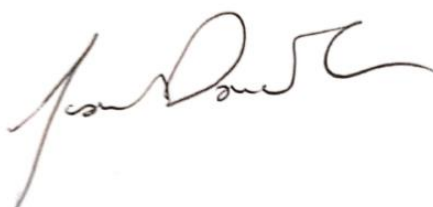
RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la sentencia que se revisa por vía de apelación, proferida por la Juez Segunda Laboral del Circuito de Bello, el de julio de 2022, en el proceso instaurado por Víctor Osvaldo Mejía Castrillón contra Conasfaltos.

SEGUNDO: Costas procesales en esta instancia, como se indicó en las consideraciones.

Se notifica lo resuelto por EDICTO. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación, se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados,



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ